

C.A. de Concepción

rtp

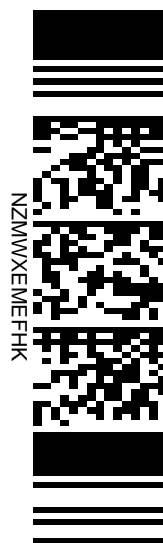
Concepción, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

**Visto, oído y considerando:**

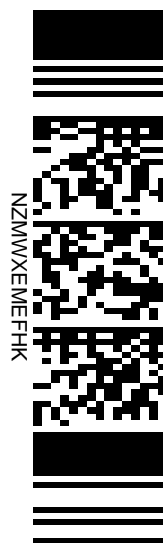
**Primero:** En estos antecedentes del ingreso Penal Rol N°3-2023, correspondiente a la causa RIT 174-2022 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en lo pertinente, resolvió: “I.- Que se absuelve a los acusados Denise Scarteth Villablanca Sobrevía, Víctor Eduardo González Torres Y Emmanuel Abraham Painén Opazo, ya individualizados, del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículo 3° y 1° de la Ley 20.000; que en calidad de autores se les atribuyó haber cometido el 14 de agosto en las comunas de Concepción y Hualpén. II.- Que se absuelve a los acusados Denise Scarteth Villablanca Sobrevía y Víctor Eduardo González Torres, ya individualizados, de los delitos de tenencia y posesión de arma de fuego prohibida, tenencia y posesión ilegal de arma de fuego convencional y tenencia y posesión ilegal de municiones; que en calidad de autores se les atribuyó haber cometido el 14 de agosto en la comuna de Hualpén. III.- Que se absuelve al acusado Segundo Alejandro González Rubilar, ya individualizado, del delito de tenencia y posesión ilegal de partes o piezas de armas de fuego; que en calidad de autor se le atribuyó haber cometido el 14 de agosto en la comuna de Hualpén. IV.- Que se absuelve al acusado Rubén Navarrete Coloma, ya individualizado, del delito de lavado de activos previsto en el artículo 27 de la Ley 19.913; que en calidad de autor se le atribuyó haber cometido entre el año 2019 y 2020 en las comunas de Concepción y Hualpén. V.- Que se condena a Yonanny Eugenio Albornoz González, ya individualizado, a la pena de dieciocho años de presidio mayor en su grado máximo, al pago de una multa de veinte Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para



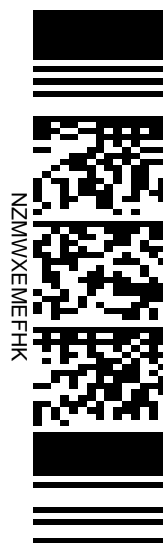
profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1º y 3º de la Ley 20.000, en grado de consumado, hecho ocurrido desde fecha indeterminada y hasta el 14 de agosto de 2020 en las comunas de Concepción y Hualpén. VI.- Que se condena a Yonanny Eugenio Albornoz González, ya individualizado, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, al pago de una multa de cien Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de lavado de activos previsto en la letra a) del artículo 27 de la Ley 19.913, en grado de consumado, hecho ocurrido entre los años 2019 y 2020 en las comunas de Concepción y Hualpén. VII.- Que se condena al acusado Rubén Darío Navarrete Coloma, ya individualizado, a la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, al pago de una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1º y 3º de la Ley 20.000, en grado de consumado, hecho ocurrido desde fecha indeterminada y hasta el 12 de junio de 2020 en las comunas de Concepción y Hualpén. VIII.- Que se condena a los acusados Patricio Andrés Albornoz González, Alexis Fabrizio Cifuentes González, Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez, Diego Abraham Concha Navarrete, Jorge Armando Muñoz Catril, Manuel René Bustos Aguayo y Jonathan Francisco De La Jara González, ya individualizados, a la pena de trece años de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y



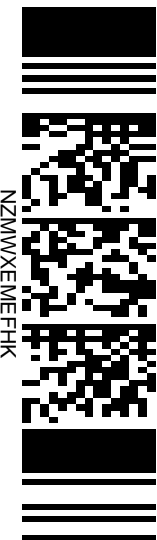
derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1º y 3º de la Ley 20.000, en grado de consumado, hecho ocurrido desde fecha indeterminada y hasta el 12 de junio de 2020 los cinco primeros y hasta el 14 de agosto de 2020 las dos últimos, en las comunas de Concepción y Hualpén. IX.- Que se CONDENA a los acusados Alejandro Exequiel Ferreira Villarroel, Carlos Daniel Bizama Álvarez, Sebastián Eduardo Albornoz Gatica y Yohany Alejandro Mancilla Albornoz, ya individualizados, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1º y 3º de la Ley 20.000, en grado de consumado, hecho ocurrido desde fecha indeterminada y hasta el 12 de junio de 2020 en las comunas de Concepción y Hualpén. X.- Que se condena al acusado Luis Eduardo Sandoval Tapia, ya individualizado, a la pena de once años de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1º y 3º de la Ley 20.000, en grado de consumado, hecho ocurrido desde fecha indeterminada y hasta el 12 de junio de 2020 en las comunas de Concepción y Hualpén. XI.- Que se condena a los acusados Irma Del Carmen González Durán y Segundo Alejandro González Rubilar, ya individualizados, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en



su grado mínimo, al pago de una multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1º y 3º de la Ley 20.000, en grado de consumado, hecho ocurrido desde fecha indeterminada y hasta el 14 de agosto de 2020 en la comuna de Hualpén. XII.- Que se condena a los acusados Rubén Darío Navarrete Coloma, Patricio Andrés Albornoz González, Alexis Fabrizio Cifuentes González, Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez, Diego Abraham Concha Navarrete, Jorge Armando Muñoz Catril, Alejandro Exequiel Ferreira Villarroel, Luis Eduardo Sandoval Tapia, Carlos Daniel Bizama Álvarez, Sebastián Eduardo Albornoz Gatica y Yohany Alejandro Mancilla Albornoz, ya individualizados, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio; a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad en calidad de autores del delito de uso malicioso de instrumento o parte falso, en grado de consumado, cometido el 12 de junio en la comuna de las comunas de Concepción y Hualpén. XIII.- Que se condena al acusado Segundo Alejandro González Rubilar, ya individualizado, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de tenencia y posesión de arma de fuego prohibida, subsumido en éste el de tenencia y posesión de arma de fuego convencional, en grado de consumado, hecho ocurrido el 14 de agosto de 2020 en la comuna de Hualpén. XIV.- Que se condena al acusado Segundo Alejandro González Rubilar, ya individualizado, a la pena de trescientos veinte días de presidio menor en su grado mínimo, a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena,

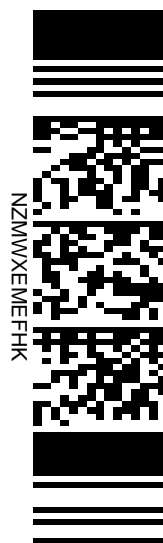


por su responsabilidad en calidad de autor del delito de tenencia y posesión ilegal de municiones, en grado de consumado, hecho ocurrido el 14 de agosto de 2020 en la comuna de Hualpén. XV.- Que se condena al acusado Emmanuel Abraham Painén Opazo, ya individualizado, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, al pago de una multa de cincuenta Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de lavado de activos previsto en la letra a) del artículo 27 de la Ley 19.913, en grado de consumado, hecho ocurrido entre los años 2019 y 2020 en la comuna de Concepción y Hualpén. XVI.- Que se condena a la acusada Irma Del Carmen González Durán, ya individualizada, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, al pago de una multa de veinte Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autora del delito de lavado de activos previsto en la letra a) del artículo 27 de la Ley 19.913, en grado de consumado, hecho ocurrido entre los años 2019 y 2020 en la comuna de Hualpén. XVII.- Que, acorde con lo razonado en el motivo trigésimo octavo de este fallo, no se sustituyen las penas temporales impuestas a los condenados por no reunirse a sus respecto los requisitos previstos en la Ley 18.216, debiendo, en consecuencia, cumplirse efectivamente las condenas impuestas. XVIII.- Que servirán de abono a las penas impuestas los días que los sentenciados han permanecido privados de libertad con motivo de esta causa, los que según la certificación respectiva son los siguientes: Sebastián Eduardo Albornoz Gatica, Carlos Daniel Bizama Álvarez, Yohany Alejandro Mancilla Albornoz, Rubén Darío Navarrete Coloma, Luis Eduardo Sandoval Tapia, Diego Abraham Concha Navarrete, Jorge Armando Muñoz Catril, Patricio Albornoz González, Alejandro Exequiel Ferreira



Villarroel Y Alexis Fabrizio Cifuentes González, 896 días, esto es, desde el 12 de junio de 2020 a la fecha; Segundo Alejandro González Rubilar, Irma Del Carmen González Durán, Yohanny Eugenio Albornoz González, Jonathan Francisco De La Jara González Y Manuel René Bustos Aguayo, 834 días, es decir, desde el 14 de agosto de 2020 a la fecha; Emmanuel Abraham Painén Opazo, 833 días, vale decir, desde el 14 de agosto de 2020 a la fecha y Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez, 698 días, contados desde el 12 de junio de 2020 hasta el 11 de mayo de 2022. XIX.- Que se faculta a los sentenciados a pagar las multas que se les impuso en 10 parcialidades mensuales, iguales y sucesivas, debiendo solucionar la primera de ellas dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a aquél en que queda ejecutoriado el fallo. Que para el evento de no pagarse la pena pecuniaria, se hará aplicación de lo previsto en el artículo 49 del Código Penal. XX.- Que, conforme lo razonado en el considerando trigésimo noveno de esta sentencia, se decreta el comiso del dinero incautado, de los vehículos detallados y de los inmuebles que en el mismo considerando se individualizan. XXI.- Que se dispone el comiso de las armas incautadas, municiones y demás evidencias relacionadas con este delito, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley sobre Control de Armas. XXII.- Dese cumplimiento en su oportunidad con lo prescrito en el artículo 17 de la Ley N°19.970. Devuélvase la prueba incorporada en la audiencia de juicio oral. Ejecutoriada que sea esta sentencia, comuníquese al Juzgado de Garantía respectivo”.

**Segundo:** Consta en autos la sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema de 30 de diciembre de 2022, en los autos Rol N°160.531-2022 que, dentro de su competencia, desestimó los recursos de nulidad intentados en contra de la sentencia individualizada en el motivo precedente por las defensas de los condenados de Emilio Berkhoff, Luis Sandoval, Alexis Cifuentes, Yohanny Albornoz, Rubén Navarrete, Alejandro Ferreira, Manuel Bustos, Patricio Albornoz, Jonathan de La Jara, Irma González, Emanuel Painén, Carlos Bizama, Yohany Mancilla y de Sebastián



Albornoz; así como también se desestimó el segundo capítulo del recurso deducido por la defensa de Diego Concha y Jorge Muñoz, reconduciendo el primer capítulo a la causal del artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, cual es la única subsistente.

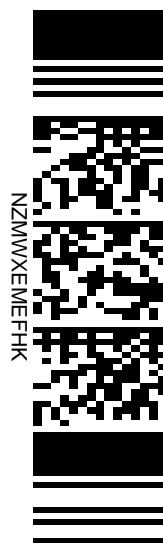
**Tercero:** Consta también en autos que la defensa del condenado **Emanuel Painén Opazo** se desistió de su recurso conforme a la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés y, asimismo, se desistió de su recurso la defensa del condenado **Alexis Cifuentes González**, de acuerdo a la resolución de seis de marzo de dos mil veintitrés.

**Cuarto:** En la audiencia fijada al efecto, se procedió a la vista de la causa, para conocer los recursos de nulidad intentados por las defensas de los condenados en la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en la causa RIT 174-2022 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, cuyas causales de nulidad corresponden a la competencia de esta Corte.

**Quinto:** Se interpuso un recurso de nulidad en contra de la sentencia individualizada en el motivo Primero de este fallo, por la defensa de los condenados Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez y Luis Sandoval Tapia, a quienes se les condenó como autores de los delitos de tráfico de drogas y uso malicioso de instrumento público.

Acá se interpone una causal de nulidad en carácter de principal, a saber, la del artículo 373 letra a) del Código Procesal, ya que en el pronunciamiento de la sentencia se ha vulnerado sustancialmente derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución y Tratados Internacionales ratificados por Chile y vigentes, específicamente la Garantía del Debido Proceso en su dimensión Legalidad y Tipicidad.

Y dos causales de nulidad en carácter de subsidiarias; la primera es la del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, por que en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señalando como infringidas las reglas del



artículo 19 letra a) de la ley 20.000 y el artículo 196 del Código Penal; y la segunda es la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 342, letra c), en relación a su vez con el artículo 297, todos del Código Procesal Penal. En esta última se denuncia una falta de fundamentación o fundamentación aparente para tener por concurrente la agravante del artículo 19 letra a) de la ley 20.000 y, respecto de la decisión de condena por el delito de uso malicioso de instrumento público.

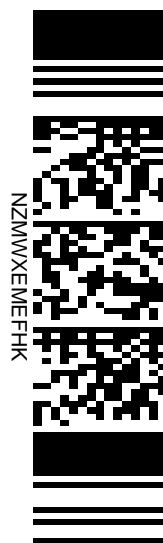
1º.- Respecto de la causal de nulidad principal, esta fue desestimada por la Excelentísima Corte, según consta en el fallo citado en el considerando Segundo de esta sentencia.

2º.- Respecto de la primera causal de nulidad alegada en carácter de subsidiaria de la causal principal antes aludida, se dice en el recurso que la sentencia impugnada hace una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, planteada en los términos del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

Acá se sostiene que **la primera ley infringida es el artículo 19 letra a) de la ley 20.000**, dado que, en síntesis, no se configuran en la especie los requisitos de “permanencia” y “cierta estructura” que la doctrina define para configurar la hipótesis fáctica que hace procedente la aplicación de la circunstancia gravante aludida.

Se cita en el recurso los considerandos Noveno (hechos acreditados), Duodécimo (configuración del delito de tráfico de drogas del artículo 3 en relación con el artículo 1 de la ley 20.000) y Décimo Sexto (donde se tiene por concurrente la agravante aludida), en relación con los hechos materia de la acusación.

Agrega que, a su entender, la sentencia adolece del vicio de nulidad denunciado, esto es, la errónea aplicación del Derecho, en relación con el artículo 19 letra a) de la ley 20.000, toda vez que, no existe un correlato entre los hechos establecidos y la agravante ya indicada.



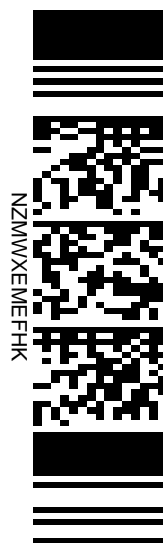


Respecto de Berkhoff Jerez cuestiona que los hechos de la acusación, en relación a los hechos que se dan por acreditados en el motivo Noveno del fallo impugnado, establecen alguna actividad o función específica en el tiempo; concluyendo que en parte alguna de aquellos hechos se puede establecer una permanencia y el cumplimiento de una función en el tiempo asociada al delito por parte de Emilio Berkhoff.

Asimismo, respecto de Luis Sandoval Tapia, no concurre la permanencia, ya que según lo referido en los hechos que se dan por sentados en el fallo impugnado, su participación se circunscribe única y exclusivamente al día 12 de Junio del año 2020, tampoco los hechos dan cuenta que forme parte de alguna estructura organizacional, no de la complejidad de la Asociación Ilícita, pero sí algo más que la coparticipación criminal, pues lo cierto es, que a la luz de los hechos establecidos, sólo se trata de una coparticipación criminal, no concurriendo respecto de él ninguno de los elementos básicos que permiten distinguir organización de coparticipación.

**3º.-** Esta alegación que se hace por la recurrente, desde luego, no configura la causal de nulidad, en esta parte, invocada, comoquiera que la denuncia efectuada, esto es, una errónea aplicación del Derecho, se sustenta en una afirmación que no guarda relato con el contexto fáctico establecido en la sentencia impugnada, esto es, se pretende aislar la participación que se imputa a los condenados Berkhoff Jerez y Sandoval Tapia, como un acto o hecho único, desligado del evidente hecho acreditado en la sentencia impugnada, cual es, que todos los condenados, directa o indirectamente, colaboraron para materializar el transporte de 823 kilos de drogas desde el norte del país hasta la región del Biobío, con ánimo de comercializarla.

Evidentemente, una operación de esta envergadura, habida consideración de los detalles expuestos en la sentencia impugnada conforme a los elementos de prueba que fueron valorados, necesariamente, revelan más que un concierto y consecuente



participación, sino que además revelan, la existencia de una estructura dirigida a cometer varios delitos, a saber, no solo transportar, sino que además comercializar, asumiendo y participando, activamente, en los hechos punibles que dicho fin impliquen. Así entendido, además, se satisface el requisito de “permanencia”, habida consideración que este no es un elemento simplemente temporal, sino que importa participar en una conducta punible múltiple, conexa, actual y venidera, cual es, en este caso, no sólo el transporte de droga, sino además su comercialización, así como además, todos los ilícitos que eventualmente, por dicha conducta, se puedan satisfacer.

4º.- Así entendido, los hechos por los cuales se acusó y condenó a Berkhoff Jerez y Sandoval Tapia, evidentemente, revelan su actuar coordinado en el contexto de una organización, la que si bien no es posible encuadrar dentro del tipo penal del artículo 16 de la ley 20.000, satisface la circunstancia agravante de responsabilidad penal a que se refiere el artículo 19 letra a) de la citada ley.

Conforme a lo anterior, en esta parte, el recurso intentado será desestimado.

5º.- Además, se reprocha que la sentencia impugnada hace una **errónea aplicación del artículo 196 del Código Penal**, pues conforme a los hechos acreditados en el referido fallo, respecto de los condenados acá aludidos, no se configura el delito de uso malicioso de instrumento público falso, en el entendido que, “es pacífico que no se estableció por parte del persecutor la exhibición y uso por parte de sus defendidos de los respectivos salvoconductos en algún control existente en las carreteras durante el traslado de la droga”.

La defensa funda su recurso, haciendo ver que sus representados, aun portando un pase de movilidad obtenido sobre la base de antecedentes falsos, el hecho de no haberlos exhibido, impediría configurar a su respecto el delito de uso malicioso de instrumento público falso.

6º.- Considerando que para la doctrina penal el instrumento público es “todo documento a cuya formación o custodia debe concurrir



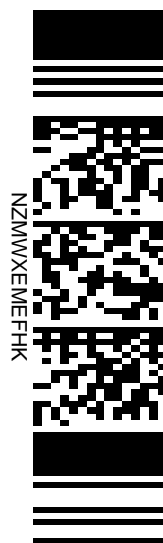
un funcionario público obrando en su carácter de tal y en cumplimiento de sus funciones legales”, el “Pase de Movilidad” o “Permiso Temporal” emitido por la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile por el competente funcionario y dentro de sus facultades, es un instrumento público, auténtico u oficial, pero otorgado en la particular forma de un “documento electrónico” de aquellos a los que refiere el artículo 2 letra d) de la ley 19.799.

7º.- Así entendido, se concluye que el documento electrónico denominado “Pase de Movilidad” o “Permiso Temporal” es un instrumento público emitido por personal policial en su calidad de funcionarios públicos y dentro de sus facultades legales, el que además contiene una “firma electrónica” que cumple con la definición contenida en la letra f) del citado artículo 2 de la ley 19.799, comoquiera que contiene un código QR que al ser leído digitalmente permite identificar al menos formalmente a su autor, esto es, el funcionario público encargado de la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile.

Esta conclusión no se altera por la regla contenida en el artículo 4 de la ley 19.799 al decir, que “Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada.”, ya que la firma electrónica avanzada allí indicada es una exigencia legal para que los “documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público” adquieran el valor probatorio a que se refiere el artículo 5 número 1 de la misma ley.

En efecto, el citado artículo 4 se refiere a un instrumento público que quiere extenderse en la forma de un documento electrónico, por lo que, con o sin firma electrónica avanzada, el instrumento público otorgado por medios electrónicos mantiene su carácter de tal, sin perjuicio del valor probatorio que en juicio corresponda darle de acuerdo a las reglas generales (plena prueba de su fecha, etcétera), no alterando con ello su naturaleza de tal.

8º.- Es por estos razonamientos que, a juicio de estos sentenciadores, los hechos por los cuales se condenó a los



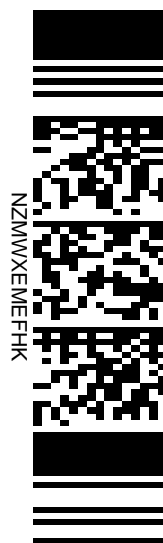
representados de la recurrente, se enmarcan en los tipos penales signados en los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal, pues el documento utilizado por ellos, en la forma que se planteó la formalización, acusación y condena, resultó ser falso, pues no obstante aparecer materialmente extendido a nombre de los condenados, al leerlo digitalmente se reveló que la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile lo había otorgado a dichas personas sobre la base de antecedentes falsos.

**9°.-** Con lo anterior, queda claro que los condenados participaron activamente en una operación coordinada para lograr el transporte de 823 kilos de drogas desde el norte del país hasta la región del Biobío, para lo cual, habida consideración de la contingencia sanitaria que afectaba a nuestro país en la fecha de los hechos y, representándose como posible un control de la autoridad durante el desplazamiento, obtuvieron pases de movilidad a través de la Comisaría Virtual, aportando datos falsos.

En este contexto, los condenados Berkhoff Jerez y Sandoval Tapia, consistieron en la obtención de dichos instrumentos, al constituir una herramienta necesaria para lograr la operación de transporte antes aludida, y por tanto, disponiendo en todo momento de ellos, estuvieron habilitados para trasladarse de lugar, independientemente si durante el tiempo del permiso temporal fueran fiscalizados al respecto por alguna autoridad.

En efecto, el permiso de movilidad autorizaba a una persona para desplazarse de un lugar a otro afectados por restricciones a la libertad ambulatoria que se hicieron durante la emergencia sanitaria Covid-19, de tal suerte que, el uso del permiso quedaba asociado a efectuar el desplazamiento y no a su fiscalización.

**10°.-** Aclarado lo anterior, yerra el recurrente al momento de plantear la causal en estudio, pues funda su pretensión de nulidad en la falta de concurrencia de un hecho que escapa a la tipicidad de la conducta descrita en el artículo 196 del Código Penal, esto es, agrega como elemento del tipo la necesaria exhibición del instrumento público



falso a determinada autoridad, lo que es suficiente para desestimar su pretensión de nulidad.

**11°.-** La segunda causal subsidiaria de nulidad interpuesta, es la del artículo 374 en relación a los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, en concreto, por falta de fundamentación o fundamentación aparente.

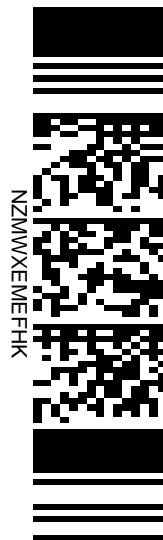
En un primer capítulo, se reprocha que los sentenciadores dan por establecida la agravante del artículo 19 letra a) de la ley 20.000, argumentando en el considerando Décimo Tercero de la sentencia impugnada porque concurren los elementos de permanencia y estructura de la organización respecto de todos los acusados, sin embargo, sostiene desde ya que no existe una real fundamentación, o más bien se trata de una fundamentación aparente cuando nos referimos a Luis Sandoval Tapia y a Emilio Berkhoff Jerez.

En un segundo capítulo, reprocha que en los considerandos Décimo Cuarto y Décimo Noveno del fallo impugnado, se da por concurrente el delito de uso malicioso de instrumento público falso, afirmando que todos los acusados usaron salvoconductos falsos, sin que dicha afirmación se encuentre afirmada en un elemento probatorio.

Con el propósito de acreditar esta segunda causal subsidiaria, junto con interponerse el recurso, se ofreció como medio de prueba, el registro de audio, correspondiente a la prueba incorporada en juicio.

**12°.-** De acuerdo a lo visto y oído, en esta parte, el recurso necesariamente será desestimado, pues en la forma planteada, para el correcto estudio de la causal, se exige que esta Corte pueda apreciar la prueba que se dice no valorada en los términos expresamente consignados en el artículo 359 del Código Procesal Penal, esto es, que la prueba sea ofrecida en el escrito de interposición del recurso, y que se reciba en la vista de la causa, conforme con las reglas que rigen su recepción en el juicio oral.

En efecto, si bien el recurrente anunció prueba en el escrito donde formuló el recurso, no solicitó en la audiencia fijada para su vista



que dicha prueba fuese incorporada conforme a las formalidades previstas para su recepción en el juicio oral.

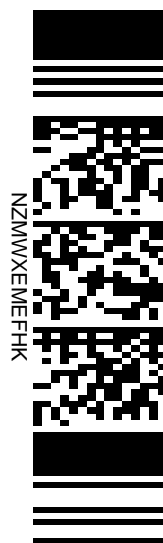
Esta omisión, impide que esta Corte pueda apreciarla legalmente durante el estudio de la causal invocada, y verificar si efectivamente las alegaciones vertidas en el recurso corresponden a la prueba en que dichas alegaciones se sustentan.

**Sexto: También recurre de nulidad la defensa Diego Abraham Concha Navarrete y Jorque Armando Muñoz Catril, a quienes se les condenó como autores de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000 y uso malicioso de instrumento público o parte falso.**

1°.- El recurso se interpuso fundado en la causal del artículo 373 letra a) y 373 letra b) del Código Procesal Penal, para la Excelentísima Corte, resolviendo dicho tribunal, como se adelantó en el motivo Segundo de este fallo, que se reconduse la causal del artículo 373 letra a) a la causal del artículo 374 e), y lo declaró inadmisble respecto del artículo 373 letra b).

Aclarado lo anterior, la causal del artículo 374 e) del Código Procesal Penal, única subsistente por la expresa reconducción efectuada por la Excelentísima Corte, se explica de la siguiente manera:

En un primer acápite, que denomina “Primer motivo de nulidad. Infracción a las normas del debido proceso”, Se denuncia que la sentencia recurrida contiene expresiones o hechos de carácter genéricos, sin determinar las conductas desplegadas, la subsunción de la misma, las fechas en que se deben acotar las mismas, sin precisar la conducta típica y específica desplegadas por sus representados, tanto es así que la misma señala: “Desde fecha indeterminada y, hasta el día de sus detenciones, los días 12 de junio de 2020 y 14 de agosto de 2020, respectivamente, los imputados referidos tomaron parte en la comisión del delito de tráfico de drogas, realizando distintas acciones, entre ellas: 1.- La adquisición, financiamiento y coordinación para transporte y el traslado de droga (cocaína base y cannabis sativa),

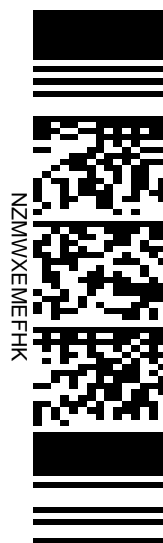


desde la zona norte del país hasta la región del Bio Bio. 2.- La comercialización, adquisición y transporte de droga, labores de coordinación del referido transporte, posesión, guarda y traslado de la misma, desde la zona norte del país hasta la Región del Bio Bio, para su posterior distribución y comercialización en la ciudad de Concepción, Hualpén e intercomuna. 3.- La obtención y suministro de medios para la comisión del delito de tráfico. 4.- La posesión, guarda, distribución y comercialización de droga en la ciudades de Concepción, Hualpén e intercomuna. 5.- La posesión y tenencia ilegal de armas de fuego, convencionales, prohibidas y municiones. 6.- Finalmente, realizaron acciones destinadas al ocultamiento o disimulación del origen ilícito de determinados bienes, vehículos y bienes raíces, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la Ley N°20.000”.

Indica que en el alegato de apertura y clausura la defensa solicitó a los juzgadores que sancionaran a sus representadas, por las conductas desplegadas por los mismos, pero no por situaciones que estos no realizaron y por ende no les son punibles, más cuando las imputaciones contenidas son de carácter genérica y no existe relación entre la conducta de sus representados y la tipicidad, generando una gran cantidad de acusados por hechos carentes de delimitación, buscando con ello hacer aplicables a todos conductas que no son subsumibles en los hechos descritos y las normas aplicables.

**2°.-** En esta parte, el recurso será desde luego desestimado, comoquiera que la conducta por la cual se condenó a los recurrentes como autores del delito de uso malicioso de instrumento público se encuentra acreditado, reproduciendo acá lo dicho en los puntos 6°.- a 8°.- del considerando Quinto de este fallo.

**3°.-** En el segundo motivo de nulidad, se dice que la sentencia infringe el principio de igualdad, porque existen otros partícipes de los hechos que fueron condenados en el Juzgado de Garantía de



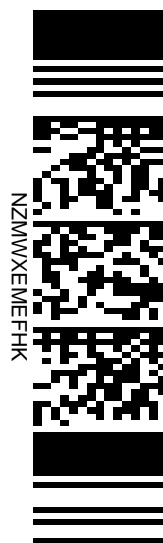
Concepción por el delito de tráfico de drogas sin aplicarles la agravante especial del artículo 19 letra a) de la ley 20.000.

Y, en el tercer motivo de nulidad se alega una afectación del principio de corroboración y congruencia, por haberse condenado a sus representados por delitos cometidos en las comunas de Concepción y Hualpén.

4°.- Respecto de los reproches anunciados en el motivo precedente y, habida consideración que la causal fue reconducida a la del artículo 374 e), puede advertirse que ella no se configura en la especie, pues la sentencia contiene los requisitos del artículo 342 letras c), d) y e) del Código Procesal Penal, lo que no se altera por los posibles yerros que, en cuestiones de fondo, pueda contener; lo que pudo ser analizado si se hubiese invocado la causal de nulidad adecuada para tal fin.

En efecto, el reproche acá no se dirige a cuestionar la existencia o no de “la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”; o “las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo”; así como tampoco “la resolución que condenare o absolviera a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar”; sino que más bien, se cuestiona valoración y calificación de los hechos, así como las conclusiones a las que se arriba en la sentencia, las que por cierto existen.

Así explicado, la causal de nulidad acá esgrimida no resulta coherente con la forma en que se fundamenta, lo que por cierto conduce a concluir que el recurso intentado no puede prosperar.



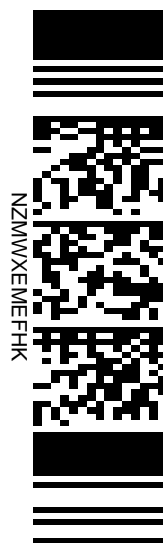


**Séptimo:** En contra de la sentencia condenatoria aludida en el primer motivo de este fallo, además, se dedujo recurso de nulidad por la defensa de los condenados Irma González Durán, Carlos Bizama Álvarez, Yohany Mancilla Albornoz y Sebastián Albornoz Gatica, denunciando que contiene, en forma conjunta, los vicios a que se refiere el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal (cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo); y la causal absoluta de nulidad del artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) y d) del Código Procesal Penal, (al infringir el tribunal las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, en la fundamentación del fallo, la valoración de los medios de prueba que fundan sus conclusiones y que permitan la reproducción del razonamiento utilizado para las conclusiones a que llega).

Así planteado, para que el recurso pueda prosperar, supone que se configuren copulativamente ambas causas de nulidad, entregando competencia a esta Corte para anular el fallo impugnado sólo en este evento.

**1º.-** Respecto de la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esta se hace consistir en el recurso, argumentando que la disposición en comento señala que procederá la declaración de nulidad total o sólo la parcial del juicio oral y de la sentencia, si el vicio hubiere generado efectos que son divisibles y subsanables por separado sólo respecto de determinados delitos o recurrentes.

Explica que en el caso de marras, **respecto del delito de falsificación de instrumento público**, el recurrente hace alusión a la atipicidad de la conducta desplegada por sus representados, toda vez que no se darían los presupuestos del tipo para estimar que, a su respecto, se ha incurrido en el delito por el que finalmente se les condena. Agrega que ha defendido con ahínco la postura de la falta de calidad de instrumento público de los permisos temporales de desplazamiento emitidos por la Comisaría Virtual, ello por cuanto éstos



no cuentan con firma electrónica avanzada, sino sólo firma electrónica simple, citando al efecto la opinión de autores de distinguida reputación que se han referido sobre el tema.

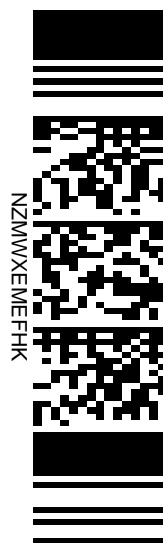
**2º.-** A juicio de estos sentenciadores, la causal de nulidad aludida no concurre en la especie por lo que, necesariamente se colige que el recurso no puede prosperar.

Esta conclusión se afirma en que los documentos denominados “pase de movilidad”, que fueron utilizados por los condenados a cuyo favor se interpone el recurso en estudio, son instrumentos públicos reconocidamente falsos, y que sirven para configurar el ilícito tipificado en los artículos 193 N°4, 194 y 196 del Código Penal, habida consideración de que su naturaleza de tal, no se altera por el hecho que no se consigne en ellos una firma electrónica avanzada propiamente tal, sino tan solo, una firma electrónica simple.

Evidentemente, estos documentos electrónicos obtenidos para ser utilizados por los condenados, son documentos que sólo el Estado de Chile puede otorgar a través de sus funcionarios, directamente y/o a través de medios electrónicos dispuestos especialmente para tal fin, no alterando dicho carácter las exigencias contenidas en la ley 19.799, ya que estas sólo se refieren al valor probatorio de la firma electrónica (simple o avanzada) consignada en un documento electrónico.

Así, lo sustentado por la defensa, ahora recurrente, es que los artículos 4 y 7 de la ley 19.799 sobre “Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma”, sólo confieren la calidad de instrumento público, cuando estos se suscriben mediante “firma electrónica avanzada”; de tal suerte que el “Pase de Movilidad” o “Permiso Temporal”, no sería un instrumento público y, por tanto, su falsificación no constituiría los delitos por los cuales se condenó a sus representados, esto es, los ilícitos de los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal.

**3º.-** Sin perjuicio de los razonados fundamentos de la pretensión de la defensa, en este particular caso los delitos por los cuales se condenó a sus representados cautelan la fe pública, y es sobre la base



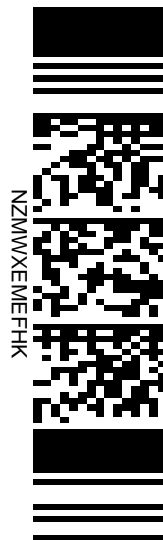
de este bien jurídico protegido que ha de establecerse si la conducta reprochada puede comprenderse o no dentro de la tipicidad antes aludida.

En esta perspectiva, la defensa no ha cuestionado que el “Pase de Movilidad” que portaban sus representados al ser fiscalizados o potencialmente fiscalizados, fueran falsificados, sino que lo reprochado es, únicamente, que la firma electrónica que en ellos constaba no fuera una firma electrónica avanzada, sino tan solo una firma electrónica simple.

Ahora bien, considerando que para la doctrina penal el instrumento público es “todo documento a cuya formación o custodia debe concurrir un funcionario público obrando en su carácter de tal y en cumplimiento de sus funciones legales”, el “Pase de Movilidad” o “Permiso Temporal” emitido por la Oficina Virtual de Carabineros de Chile por el competente funcionario y dentro de sus facultades, es un instrumento público, auténtico u oficial, pero otorgado en la particular forma de un “documento electrónico” de aquellos a los que refiere el artículo 2 letra d) de la ley 19.799.

**4º.-** Así entendido, se concluye que el documento electrónico denominado “Pase de Movilidad” o “Permiso Temporal” es un instrumento público emitido por personal policial en su calidad de funcionarios públicos y dentro de sus facultades legales, el que además contiene una “firma electrónica” que cumple con la definición contenida en la letra f) del citado artículo 2 de la ley 19.799, comoquiera que contiene un código QR que al ser leído digitalmente permite identificar al menos formalmente a su autor, esto es, el funcionario público encargado de la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile.

Esta conclusión no se altera por la regla contenida en el artículo 4 de la ley 19.799 al decir, que “Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada.”, ya que la firma electrónica avanzada allí indicada es una exigencia legal para que los “documentos electrónicos



que tengan la calidad de instrumento público” adquieran el valor probatorio a que se refiere el artículo 5 número 1 de la misma ley, conforme a las reglas de valoración de la prueba legal o tasada.

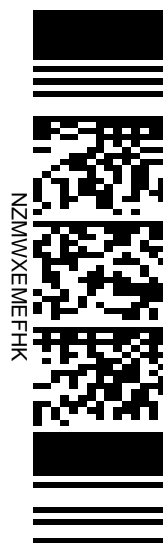
En efecto, el citado artículo 4 se refiere a un instrumento público que quiere extenderse en la forma de un documento electrónico, por lo que, con o sin firma electrónica avanzada, el instrumento público otorgado por medios electrónicos mantiene su carácter de tal, sin perjuicio del valor probatorio que en juicio corresponda darle de acuerdo a las reglas generales dentro de un sistema de valoración tasado (plena prueba de su fecha, etcétera), lo que por cierto no altera su naturaleza de tal.

5°.- Es por estos razonamientos que, a juicio de estos sentenciadores, los hechos por los cuales se condenó a los representados de la recurrente, se enmarcan en los tipos penales signados en los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal, pues el documento utilizado por ellos, en la forma que se planteó la formalización, acusación y condena, resultó ser falso, pues no obstante aparecer materialmente extendido a nombre de los condenados, al leerlo digitalmente se reveló que la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile lo había otorgado a dichas personas sobre la base de antecedentes falsos.

6°.- Respecto de la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal invocada en el recurso en estudio, conjuntamente con la anteriormente analizada, se explica, en relación con el artículo 342 del Código Procesal Penal.

De acuerdo a la estructura del recurso, esta causal se explica separadamente respecto de cada uno de los condenados que indica, por lo que se procederá a su análisis de dicha forma.

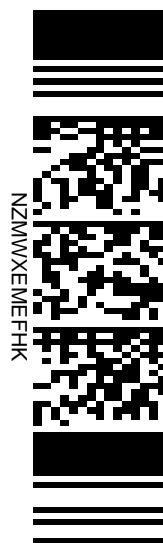
7°.- Respecto del delito de lavado de activos cometido por la condenada **Irma González Durán**, se sostiene en el recurso que los sentenciadores de la instancia arribaron a la decisión de condenada, considerando únicamente que: “En cuanto al delito de lavado de activos imputado a Irma González Durán, efectivamente se trata de un



único acto consistente en aceptar la compra de un bien raíz a su nombre e inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces respectivo para ocultar o disimular el origen irregular de los dineros con los cuales se pagó el precio de la compraventa; pago que consta en la propia escritura pública suscrita por la acusada. Que, si bien no se allegaron más antecedentes respecto de la vendedora o de los funcionarios de la notaría en la que se efectuó la suscripción del contrato, bien pudo la propia defensa haber aportado prueba que desvirtuaran la pretensión fiscal planteada en la acusación, sin embargo ello no ocurrió. Pero, aún más, la defensa no se hizo cargo de otros antecedentes que pesaron en la decisión del tribunal, como fue la circunstancia que la acusada es pariente directa de Yohanny Albornoz, que la escritura no estuviese en su poder, sino que en el inmueble de Albornoz González, que la escritura suscrita por Irma González fue firmada con dos días de diferencia de aquella suscrita por Carla Lissette Navarrete Navarrete, otras de las propiedades relacionadas con el lavado de activos imputado a Albornoz González; que fue tramitada por la misma persona, en este caso, Romina Bustos Aguayo; que aparecen con números de repertorio correlativos y que Irma González Durán no registra ingresos formales y una situación socioeconómica suficiente para justificar esta adquisición”.

Se dice en el recurso que esta conclusión “contradice los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Las posibilidades a que aluden tales normas son múltiples, desde la omisión total de la motivación fáctica, pasando por una fundamentación incompleta de la valoración de los elementos de prueba incorporados al juicio, hasta la defectuosa utilización o infracción de los parámetros de la sana crítica”.

**8°.-** Sin perjuicio que el recurrente en esta parte cita sentencias de la Corte de Suprema y plantea teorías alternativas de los hechos, lo cierto es que no explica ni desarrolla, cuáles son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, que estima infringidos, de qué forma se

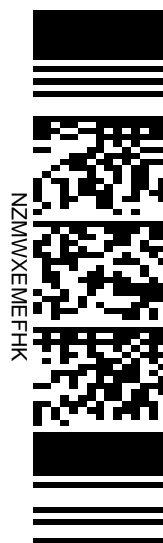


produce la pretendida infracción, así como tampoco señala, conforme a lo anterior, cuáles son los elementos probatorios y de qué forma corresponde valorarlos conforme a la sana crítica, para arribar a una conclusión distinta de aquella que se alcanza en la sentencia impugnada.

Esta omisión, resta competencia a esta Corte para que pueda efectuar un correcto análisis de la causal invocada, coligiéndose de ello que, necesariamente, en esta parte el recurso tampoco puede prosperar.

**9°.-** Finalmente, dentro de esta segunda causal de nulidad, se incorpora un reproche a la decisión contenida en la sentencia, de hacer aplicable a los condenados Irma González Durán, Carlos Bizama Álvarez, Yohany Mancilla Albornoz y Sebastián Albornoz Gatica, la circunstancia agravante de responsabilidad penal señalada en el artículo 19 letra a) de la ley 20.000.

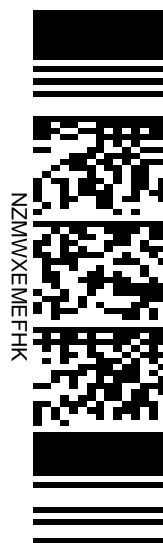
En este acápite, el recurrente sostiene que: “Al respecto debemos señalar que esta se aplica cuando las conductas suponen una estructura de relevancia que suponga un mayor grado de coordinación, con permanencia en el tiempo, con pago de remuneraciones y con jerarquías establecidas. Que, conforme a lo indicado por los funcionarios de la PDI, Yohany Mancilla, Carlos Bizama y Sebastián Albornoz, recién fueron detectados en la Región de Atacama. Mas no fueron vistos en la Barbería, ni en la Población 18 de Septiembre, ni en la casa de Yohanny Albornoz ni en ningún domicilio de los coimputados, sino que sólo prestaron cobertura para los vehículos que llevaban la droga llegaran a destino, por tratarse de un delito de participación necesaria pues de lo contrario este delito no pudo haberse ejecutado sin la intervención de varios sujetos en varios vehículos. Por lo tanto, ellos no formaron parte de una banda sino que fueron copartícipes en un único delito. Respecto del delito de tráfico, ellos sólo intervinieron en la cobertura, no intervienen en la adquisición, transporte, guarda de la droga ni en la comercialización de la misma. Por ello, gozando de irreproachable conducta, se pedirá el mínimo de la



pena que la ley prevé para esta conducta. Respecto de la coimputada Irma González Durán, de lo esgrimido por los sentenciadores en cuanto a la permanencia en el tiempo y a la organización, no se logra reproducir el razonamiento que realiza, toda vez que quedó demostrado tanto por las declaraciones de los funcionarios de la PDI como por los dichos de los coimputados que doña Irma era una consumidora habitual de las sustancias que le fueran incautadas, presentando un deterioro cognitivo importante debido, precisamente, al abuso de dichas sustancias, lo que en palabras de Concha Navarrete “No era apta para la pega”, entendiéndose realizada dicha declaración al consultarle esta defensa sobre una eventual participación más activa en el delito de tráfico, por cuanto no se le podía entregar la responsabilidad de “hacerse cargo del negocio” si era conocida por su adicción a la pasta base de cocaína. En ese contexto, atribuirle a esta acusada la concurrencia de la agravante del referido artículo teniendo en consideración su escasa e incluso nula participación en los delitos de tráfico de mayor escala que involucró el transporte de 823 kilos de sustancia ilícita transgrede el principio de razón suficiente”.

**10º.-** Como ya se ha sostenido y razonado en los motivos precedentes de este fallo, la causal invocada supone un reproche que configuraría a causal absoluta de nulidad del artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) y d) del Código Procesal Penal, esto es, que el tribunal de la instancia infringió las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, en la fundamentación del fallo, la valoración de los medios de prueba que fundan sus conclusiones y que permitan la reproducción del razonamiento utilizado para las conclusiones a que llega.

**11º.-** Como queda claro de la sola lectura de la transcripción del recurso efectuada en el punto 9º.- precedente, nuevamente no se explica ni desarrolla, cuáles son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, que estima infringidos, de qué forma se produce la pretendida infracción, así como tampoco señala, conforme a lo anterior, cuáles son los



elementos probatorios en que se sustenta su pretensión y de qué forma corresponde valorarlos conforme a la sana crítica, para arribar a una conclusión distinta de aquella que se alcanza en la sentencia impugnada; siendo insuficiente simplemente anunciar una infracción al principio de la razón suficiente, sino se explica seguida y motivadamente la forma en que se produce la infracción.

A mayor abundamiento, la sentencia impugnada da razones para arribar a la conclusión de aplicar la agravante aludida, afirmadas en una apreciación de la prueba y de los hechos mirados en su conjunto, de los cuales, como se ha dicho y razonado en los motivos precedentes, la organización de los condenados existió, de tal suerte que resulta incorrecto analizar su conducta en forma aislada, ya que es cúmulo de sus conductas lo que revela la citada organización para lograr el traslado de la droga dirigida a obtener su posterior comercialización, lucrarse de tal actividad, y realizar operaciones para encubrir el origen ilícito de sus beneficios.

La entidad de esta omisión, resta competencia a esta Corte para que pueda efectuar un correcto análisis de la causal invocada, coligiéndose de ello que, en esta parte, el recurso tampoco puede prosperar.

**Octavo: En contra de la sentencia en estudio, además, la defensa del condenado Jonathan Francisco De la Jara González interpone recurso de nulidad, denunciando la concurrencia de la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.**

Sostiene que la sentencia impugnada incurre en este motivo de nulidad, conjuntamente, de 2 formas: primero, por la aplicación que se le da en el caso de autos al artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, referido a la agravante de responsabilidad de “Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16” y, segundo, al no considerar configurada la atenuante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal, que se refiere a “Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos”.

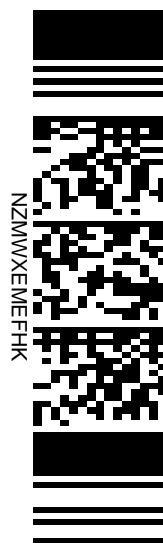




**1º.-** Para el análisis de la causal invocada en el recurso deducido por la defensa del condenado De la Jara González, se tendrá presente, como se ha hecho en el estudio de las causales analizadas precedentemente, que se incurre en una errónea aplicación del derecho cuando “existe una contravención formal del texto de la ley, es decir, cuando el juzgador vulnera de manera palmaria y evidente el texto legal; cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de la sentencia; y cuando existe una falsa aplicación de la ley, situación que se verifica si el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resultaba realmente pertinente su aplicación”; esto es, que reconociendo como efectivos los hechos asentados en el fallo impugnado, se cuestiona la aplicación de la o las normas que sirven a los sentenciadores para arribar a la decisión de condena o absolución.

**2º:-** Bajo la premisa anteriormente establecida, se sostiene en el recurso que la primera manifestación de la causal de nulidad invocada es una errónea aplicación del artículo 19 letra a) de la ley 20.000.

Para argumentar la procedencia de la causal de nulidad invocada, la defensa, en esta parte, hace una narración de los hechos que a su juicio le parece ser la correcta, no compartiendo los hechos que en la sentencia se tuvieron por probados, en lo pertinente, que todos los condenados formaban parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16. Así sostiene que De la Jara González efectivamente traficaba droga, pero que era un competidor de Yohanny Albornoz, cuestionando especialmente, el elemento central de la gravante que es la “permanencia en el tiempo”, la que es materialmente imposible encontrar en su representado, toda vez que a la fecha de su detención llevaba menos de 10 meses en libertad, por lo que no pudo haber tenido participación alguna en las operaciones previas reseñadas, tales como incursiones al norte del país. Además señala que, “la cuantía que es uno de los indicadores señalados, es de solo 20 kilos de droga y \$1.000.000 respecto de mi representado, cuantías notablemente



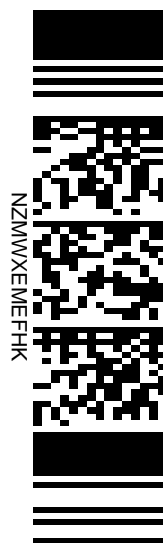
alejadas de aquello que se sindicó respecto de la agrupación, y que, como ya se señaló, se explicó su origen en la declaración prestada en juicio, que no es el mismo origen de la droga que comercializarían los otros coimputados y que determina esta permanencia en el tiempo de la agrupación”.

**3º.-** Indudablemente, en esta parte, el recurrente cuestiona las conclusiones fácticas a las que se arriba en la sentencia impugnada, presentando una teoría alternativa de los hechos conforme a una valoración de la prueba que cita, para luego, a partir de una nueva hipótesis fáctica, construye conclusiones jurídicas que desde luego son distintas a las que consignadas en la sentencia impugnada, precisamente, por haber alterado los hechos acreditados por los sentenciadores de fondo.

Visto así, la causal de nulidad en estudio no se configura en la especie, comoquiera que el vicio denunciado no se sustenta en los hechos establecidos en juicio, sino en una nueva valoración de la prueba, restando con ello competencia a esta Corte para apreciar la errónea aplicación del derecho denunciada, y obliga, necesariamente, a concluir que en esta parte el recurso no puede prosperar.

**4º.-** La segunda manifestación de la causal de nulidad invocada en este recurso, es una errónea aplicación del artículo 11 N°9 del Código Penal, bajo el entendido que la sentencia impugnada, erróneamente, estimó que no se configuraba en la especie la circunstancia atenuante alegada por la defensa del condenado De la Jara González.

En este capítulo, se dice en el recurso que Jonathan De la Jara declaró en este juicio, ayudando a la acertada comprensión de los hechos, relató cómo llegó a hacerse de la droga que comercializaba, donde guardaba la sustancia, el modo en que operaba, explicó cómo adquirió los 2 autos que le pertenecían, dio razón de los hechos grabados en las escuchas telefónicas, explicó su relación con cada una de las personas a que se le vincula, entre otras; configurando estos hechos, a su juicio, la necesaria colaboración sustancial al

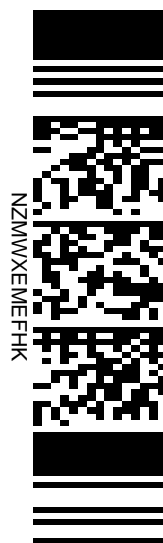


esclarecimiento de los hechos que exige la circunstancia atenuante de responsabilidad esgrimida a favor del condenado.

**5°.-** En lo pertinente del fallo impugnado, citado por cierto en el recurso en estudio, se dice expresamente que: “en el caso del penado Jonathan de la Jara González, no se configura la atenuante invocada por la defensa, esto es, la prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal, ni menos aun su calificación; por cuanto sus dichos, al igual como ocurrió con el acusado Concha Navarrete, carecen de toda conexión con el resto de las pruebas vertidas en juicio. En efecto, el señor De la Jara González pretendió entregar al tribunal un relato en el que aparecía como una persona, que aunque se dedicaba al tráfico de drogas, lo hacía de manera independiente, al punto de señalar que Yohanny Albornoz era un verdadero competidor en la venta de alcaloides. No obstante ello, de las escuchas reproducidas en juicio, de las vigilancias efectuadas en el Pasaje 1 y en la calle Gran Bretaña, los hallazgos en su propiedad y en los vehículos que poseía, sumadas a los dichos de los funcionarios; queda meridianamente claro que su labor estaba directamente vinculada a Yohanny Albornoz, no sólo en la venta de drogas, sino que en el control sobre la "Barbería" y en las coordinaciones con otros miembros de la agrupación, como ocurrió con Manuel Bustos Aguayo y Segundo González Rubilar”.

**6°.-** Nuevamente acá, el recurrente afirma la causal de errónea aplicación del derecho, no en los hechos asentados en la sentencia que impugna, sino que en una hipótesis fáctica construida a partir una valoración alternativa de los medios de prueba.

En efecto, en la transcripción efectuada en el motivo presente, la declaraciones allí aludidas se aprecian en la sentencia impugnada como inconexas con los demás medios de prueba, restándole por ello de valor para acreditar los hechos en que pretender asistirse la defensa para argumentar la aplicación del artículo 11 N°9 del Código Penal a favor del condenado De la Jara González; lo que no sólo es incorrecto, sino que además improcedente, ya que en el análisis de la específica causal de nulidad invocada, esta Corte, carece de competencia para



alterar los hechos fijados en la sentencia impugnada; de tal suerte que, necesariamente, en este extremo, el recurso también será desestimado.

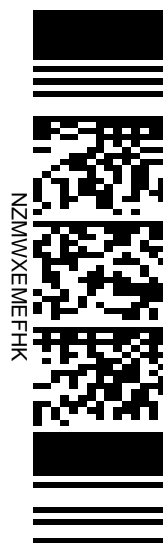
**Noveno: Por último, la defensa de Yohanny Albornoz González, Rubén Navarrete Coloma, Alejandro Ferreira Villarroel, Manuel Bustos Aguayos y Patricio Albornoz González, presentaron un recurso de nulidad fundado en la causal de artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en carácter de principal, el que como se adelantó, fue declarado inadmisibile por la Excelentísima Corte en el fallo citado en el motivo Segundo de este dictamen.**

**También alegó, en forma subsidiaria, la concurrencia de la causal de nulidad contemplada en el artículo 374 letra f) y, aun en subsidio, la del artículo 373 letra b), ambas del Código Procesal Penal.**

1°.- Respecto de la primera causal subsidiaria, se invoca como causal infringida la del artículo 374 letra f), esto es cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341. Norma esta última, que expresa en su inciso primero: “Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no comprendidos en ella”.

2°.- En primer lugar, señala que la causal concurre respecto de todos sus representados, y en relación al delito de tráfico de drogas del artículo 3 en relación a la agravante del artículo 19 letra a), ambos de la Ley 20.000.

Acá se sostiene que el marco territorial -cuestión alegada por esta defensa- que fijó la propia acusación lo fue al Norte del País (Chañaral, Tocopilla, Sierra Gorda). Cuestión que acota el espacio territorial donde se verifican los hechos de la acusación y que se pormenorizan de forma expresa. No obstante ello, la sentencia recoge, pondera y da valor, como elemento de corroboración a la convicción condenatoria de la sentencia, en varias oportunidades, a hechos y



circunstancia que escapan al marco territorial fijado por la propia sentencia, y refiriéndose a situaciones y hechos verificados al Norte de Sierra Gorda, e inclusive en la ciudad de Iquique; excediendo con ello el marco acusatorio y afectando la congruencia exigida por el citado artículo 341.

**3°.-** En esta parte, el recurso será desestimado, comoquiera que los hechos de la acusación son coherentes con los hechos fijados en la sentencia, especialmente, porque tanto en una como en la otra, se describe una operación determinada que se enmarca en una pluralidad de delitos dirigidos a trasladar droga desde el norte del país a la Región del Biobío, con ánimo de comercializarla, siendo este el marco territorial de los delitos y no sólo el norte del país.

**4°.-** En segundo lugar y dentro de este acápite, se invoca la causal del artículo 374 letra f) respecto del imputado **Rubén Navarrete Coloma**, y en relación al delito de uso malicioso de instrumento público. Señala que no existe congruencia entre la acusación y la sentencia, toda vez que la acusación imputó a su representado el uso de un instrumento público falso elaborado por Manuel Bascuñan Morales, y en los hechos, el documento que él tenía al momento de su detención emanaba de otra persona.

**5°.-** En este extremo el recurso también será desestimado, pues no obstante la lógica de lo argumentado para fundar la causal, lo cierto es que en el delito de uso de instrumento público falso, lo relevante es utilizar el instrumento falso a sabiendas de su falsedad, independientemente de quien sea el autor de dicha falsedad.

Así entonces, se condena a Navarrete Coloma por usar un instrumento público falso, cual es la imputación que se hace tanto de hechos como de circunstancias efectuadas en la acusación, lo que se no altera por acreditarse luego en la sentencia que el autor de la falsedad sea otra persona o bien, que luego se acredita la autoría de la falsedad que al momento de la acusación se desconocía; ya que el autor de la falsedad, como se dijo, no es un elemento del tipo por el cual se condenó a Navarrete Coloma.



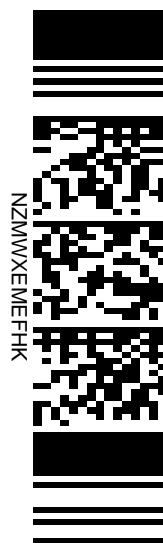
6°.- Respecto de la segunda causal subsidiaria, se denuncia una errónea aplicación del derecho, que se materializa en las siguientes situaciones.

El primer yerro, se circunscribe al dar por concurrente la agravante prevista en la letra a) del artículo 19 de la Ley 20.000 respecto de todos sus representados, manifestándose tanto al momento de dar por concurrente la agravante, como al momento de determinar la pena que corresponde a los imputados.

Explica que, para darse por concurrente la citada agravante, se requiere de un plus que vaya más allá de la coautoría, y necesaria colaboración para la consecución del fin delictivo. En efecto, y tal como se señaló por alguno de los funcionarios de la PDI, para cometer el delito de tráfico imputado, se requería necesariamente, un número de personas, y vehículos como los que participaron en el delito. No era posible de otra forma. De ahí entonces que el número de involucrados, sólo obedece a la coparticipación necesaria para la comisión del ilícito. Por otra parte, dentro del plus que se exige para dar por concurrente la agravante, que por lo demás por su naturaleza es de interpretación restrictiva, se requiere, y conforme lo exige la doctrina, de permanencia en el tiempo destinada a cometer un sin número de delitos. Cuestión esta última que claramente no se da en la especie. Amén que quedó claro que los partícipes del ilícito y detenidos el día 12 de junio de 2020, lo hicieron en esa única oportunidad. Y en relación a los imputados detenidos con fecha 14 de agosto de 2020, la comisión de ilícitos imputados incidió, en delitos distintos y desvinculados del cometido el día 12 de junio de 2020. De ahí entonces que al darse por concurrente en el considerando Décimo Sexto incurre en error de derecho, al aplicar una norma que jurídicamente era improcedente.

El segundo yerro, se manifiesta al momento de determinar la pena aplicable con la concurrencia de la agravante anteriormente señalada.

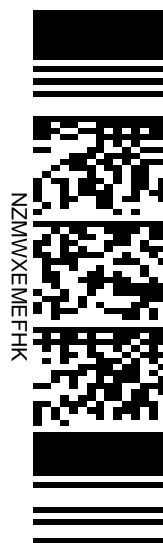
Explica que en el considerando Trigésimo Sexto de la sentencia impugnada, en su letra a), se establece: “Que respecto de todos los



acusados que resultaron condenados por el ilícito descrito y sancionado en el artículo 1° y 3° de la Ley 20.000; -no obstante, no tratarse de una materia propia de la audiencia regulada en el inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal- sólo para efectos sistemáticos, se hace presente que al concurrir la agravante contemplada en la letra a) del artículo 19 de la Ley 20.000, la pena asignada por ley al delito, será aumentada en un grado, por lo tanto, se eleva toda la pena prevista por el legislador, conservado el marco penal de dos grados; en consecuencia, la pena a imponer comienza en presidio mayor en su grado medio, pues el efecto de esta calificación no contempla una limitación con la descrita en el inciso cuarto del artículo 68 del Código Penal en cuanto a la forma en que ha de hacerse el aumento de grado señalado por la ley al delito”.

Señala que existe una errónea aplicación del derecho, por cuanto la pena se aumenta en un grado, pero constituyendo cada grado de una pena divisible, conforme al artículo 57 del Código Penal, una pena distinta. Este grado se aumenta desde la pena mínima, o dicho de otra forma no se impone el grado mínimo de la pena del delito de tráfico, aumentando en un grado la pena a imponer, quedando en presidio mayor en su grado medio. Pero no se aumenta o faculta al Tribunal para subir en dos grados. De forma que se aplica erróneamente el derecho por parte del Tribunal, toda vez que da una interpretación extensiva a una circunstancia agravante que pretende aplicar más allá de lo que la norma permite. Influyendo tal error en lo dispositivo del fallo, ya que da al Tribunal un marco punitivo mayor al que jurídicamente corresponde.

El tercer yerro se explica en relación a los imputados Rubén Navarrete Coloma, Alejandro Ferreira Villarroel, y Patricio Albornoz González, al condenarlos como autores del delito consumado de uso de instrumento público, previsto en los artículos 196, 193, y 194 del Código Penal. Toda vez que no se configuraba tal delito, por faltar un elemento normativo del tipo “el instrumento público”, siendo la conducta atípica, y no punible.

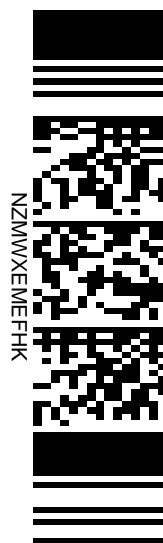


El cuarto yerro se explica respecto del imputado Yohanny Alborno González, y en relación al artículo 11 N°9 del Código Penal, por cuanto el Tribunal debiendo otorgar al imputado la atenuante de colaborar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, no le dio la referida atenuante. Ahora si bien es cierto el imputado no admitió completamente su responsabilidad en los ilícitos que se le imputaron, a saber tráfico de drogas y lavado de activos, ello no es obstáculo a la concesión de la atenuante.

**7°.-** Respecto de la primera y tercera hipótesis de errónea aplicación del derecho formulada en el recurso, se reproduce acá lo razonado en las motivaciones precedentes por estos sentenciadores, especialmente en lo que se refiere a la concurrencia de la circunstancia agravante del artículo 19 letra a) de la ley 20.00 y, del delito de uso malicioso de instrumento público falso, (Motivo Quinto, números 3°.- a 8°.-) comoquiera que se encuentra establecido en la sentencia impugnada un contexto fáctico del cual necesariamente se colige la existencia de una organización dedicada a la comercialización de drogas, de la que formaron parte los recurrentes y, además, quedó superado que en el traslado de la droga se usaron pases de movilidad obtenidos desde la Comisaria Virtual incorporando para ello datos falsos, lo que tipifica la conducta descrita en el artículo 196 del Código Penal.

**8°.-** Respecto de la errónea aplicación del artículo 57 del Código Penal, para descartar la pretensión de nulidad formulada en el recurso, basta indicar que el efecto inmediato de la agravante especial contenida en el artículo 19 de la ley 20.000 en la determinación de la pena, se indica precisamente en la referida norma, esto es, aumentar la pena en un grado.

Ahora bien, dado que el delito de tráfico de drogas se castiga con presido mayor en su grado mínimo a medio, constituyendo cada una de estas penas un grado de penalidad, el aumento de grado se aplica sobre la pena o grado máximo; que es lo que se estableció en la sentencia impugnada.





**9°.-** Finalmente, respecto de la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, cuya aplicación se pretendió por la defensa de Albornoz González, puede verse en la sentencia una motivación expresada por los sentenciadores del grado dirigida a calificar las conductas del citado condenado en la hipótesis de colaboración sustancial, señalando expresamente que dichas conductas no sirvieron para el esclarecimiento de los hechos investigados, especialmente, por la fuerza probatoria de los demás antecedentes probatorios aportados al juicio.

Así entendido, y no existiendo una conclusión fáctica establecida en la sentencia impugnada dirigida a revelar que el condenado Albornoz González colaboró sustancialmente con la investigación, no es posible que estos sentenciadores, dentro de los límites de la causal invocada, desatiendan los hechos fijados en el fallo.

**10°.-** Por todo lo anteriormente razonado, el recurso intentado por la defensa de Yohanny Albornoz González, Rubén Navarrete Coloma, Alejandro Ferreira Villarroel, Manuel Bustos Aguayos y Patricio Albornoz González, no puede prosperar.

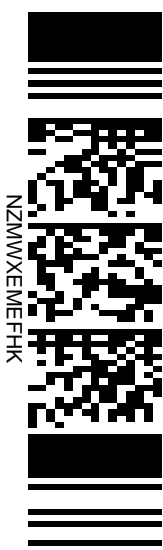
Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal, **se rechazan**, sin costas, todos los recursos intentados en contra de la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós recaída en los autos RIT O-174-2022 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, la que no es nula.

Notifíquese, léase en la audiencia fijada al efecto y, devuélvase.

Redactó el abogado integrante Marcelo Matus Fuentes, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Penal-3-2023.





NZMWXEMEFHK

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los Ministros (as) Hadolff Gabriel Ascencio M., Rafael Andrade D. Concepcion, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

